

La impronta del destacamento más secreto del DINE

Eduardo Frei Montalva: Las huellas del crimen

Por Mónica González y Patricia Verdugo

Dos muertes aún extienden sus sombras en los tribunales chilenos. Sombras que amenazan dos columnas claves de la transición, la cívica y la militar, si se comprueba que los asesinos del químico de la DINA y el DINE Eugenio Berríos fueron militares y que se lo ejecutó para tapar otro asesinato: el del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Matar a Berríos también tuvo otro objetivo no menor y que aún perdura: impedir que emergiera la caja negra del capítulo de la guerra química que protagonizó uno de los escuadrones más secretos de los servicios de seguridad de la dictadura.

El epicentro del conflicto se instala hoy en los tribunales chilenos. El segundo informe de la Brigada de Homicidios debe llegar a manos de una jueza en estos días. Bastante polvareda levantó en mayo del año pasado el primero de ellos, uno que contenía la identificación de seis militares –dos oficiales y cuatro suboficiales– como los presuntos participantes en la operación para sacar al bioquímico Eugenio Berríos de Chile, a fines de 1991.

El Ejército reaccionó airado, se quejó de no haber sido informado por La Moneda y de falta de “coordinación” con la policía de Investigaciones. No esperó la citación judicial y presentó “voluntariamente” a los mencionados en el informe. Pero la jueza Olga Pérez –Sexto Juzgado del Crimen– no tenía aún el informe en sus manos ni pauta de interrogatorio. Todos quedaron en libertad por falta de méritos.

Ahora –para el segundo informe de la BH– la cautela es la orden del día. Se espera la identificación de todos los que participaron en la operación Berríos, un grupo que –además– estaría involucrado en otros hechos criminales. Y por primera vez surge el nexo indeleble entre el crimen de Berríos y el de Frei Montalva.

Se considera, además, la posibilidad inminente de que la Corte Suprema designe un ministro en visita para el caso Berríos. Vale aquí el artículo 560, número dos, del Código Orgánico de Tribunales: “El tribunal ordenará especialmente estas visitas cuando se tratare de la investigación de hechos que puedan afectar las relaciones internacionales”. Y es un hecho que para este truculento crimen se movilizó la red castrense de Inteligencia del Cono Sur –“Pacto Cóndor Sur”– en un operativo conjunto chileno, argentino y uruguayo que, además, casi costó un golpe de Estado en Uruguay.

Se necesita un ministro en visita –dicen los abogados– para un caso de tamaña envergadura. Porque se trata del asesinato de un importante agente DINA-CNI-DINE, por orden emitida en Chile, en 1993, ya avanzada la transición. Se trata del posible asesinato de un ex Presidente de la República, en plena dictadura, cuando se erigía ya en líder de la disidencia. Y se trata del armamento químico del Ejército.

Los abogados suman fuerzas: Tomás Ehrefeld, representando a la familia de Berríos, y Alvaro Varela, por la familia Frei. Curioso resulta, sin duda, que abogados del victimario y la víctima colaboren en esta complicada investigación. Pero lo cierto es que el criminal agente Berríos se convirtió también en víctima. Y ambas partes exigen la verdad.

La dupla se convertiría en trío en los próximos días, cuando entre en acción Fabiola Letelier. Porque ella fue la que abrió la caja de Pandora en 1991, mientras tramitaba diligencias por el asesinato de su hermano, el ex canciller Orlando Letelier.

Vale recordar brevemente la historia.

Cuando la abogada Letelier conoció la confesión hecha por el agente DINA Michael Townley –en marzo de 1978, días antes de que se decidiera entregarlo a Estados Unidos– supo de la existencia del bioquímico Berríos. Allí quedaba claro que éste había logrado fabricar el gas Sarín, inventado por los nazis en la Segunda Guerra, y otros gases mortales. Townley planeó matar a Letelier con ese gas, que simula un ataque cardíaco en la víctima. Llevó –dijo– “un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con Sarín”.

El ministro en visita Adolfo Bañados dictó encargatoria de reo contra Berríos, pero no pudo ser hallado por la policía. Nada se supo del bioquímico hasta que estalló el escándalo en Uruguay, en junio de 1993.

Escándalo en Chile no ha habido hasta ahora. Pero todo indica que en la Moneda y en el Congreso, en los partidos políticos (especialmente la DC) y en las Fuerzas Armadas (especialmente el Ejército), amén del Poder Judicial, los casos Frei y Berríos provocan más que pesadillas.

El Caupolicán en la historia.

Pasado el mediodía del miércoles 27 de agosto de 1980, los alrededores del Teatro Caupolicán se convirtieron en un territorio en guerra. Policías fuertemente armados ocuparon las calles aledañas para impedir que miles de chilenos se congregaran para decirle No a la dictadura.

El clima represivo se había agudizado desde que el domingo 10 de agosto Pinochet, sorpresivamente, convocó a un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. Sin registros electorales ni prensa libre, sin derecho a reunión, con represión, cárceles secretas y la ausencia de debate democrático, el anuncio era un llamado a institucionalizar la dictadura.

La misma noche de la convocatoria, dirigentes de la Democracia Cristiana, la única fuerza política con cierta actividad permitida, se reunieron y emitieron una declaración en la que la calificaron como un acto de extrema violencia, carente de toda validez. Andrés Zaldívar, presidente de la DC, llamó a movilizarse “aún entendiendo los riesgos”.

Todos entendieron de qué riesgos hablaba. En la vereda del “No al plebiscito”, un soterrado movimiento en la sombra intentaba articular a los disidentes. Al frente, el despliegue de los comandos encabezados por Pablo Baraona, Carlos Bombal y los juveniles Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma.

La Coordinadora Nacional Sindical, encabezada por Manuel Bustos, pidió permiso para una reunión. El ministro del Interior, Sergio Fernández, respondió: “no permitiremos que grupos de fachada del marxismo internacional, carentes de representación, pretendan realizar actividades políticas”. El fraude no tenía disfraz.

El ex Presidente Eduardo Frei Montalva regresó a Chile el 15 de agosto. “El plebiscito no es más que un artificio para perpetuarse en el poder por nueve años más”, anticipó desde Sao Paulo. El 20 de agosto la mayoría DC que propició una activa oposición se impuso por sobre quienes pidieron abstención. Se pidió el Caupolicán y una cadena nacional. La cadena fue rechazada. Monseñor Jorge Medina, entonces Pro Canciller de la Universidad Católica, también se negó a darle espacio en las ondas del Canal 13.

Llegó al miércoles 27. Miles de hombres y mujeres vencieron el miedo y colmaron desde temprano las graderías. En las afueras otros miles, hombro con hombro, rodeados de amenazantes policías. Por primera vez, democratacristianos coincidían con socialistas y comunistas. El clima era de

máxima tensión. De improviso, el grito de Allende retumbó en el Caupolicán repleto y se repitió hasta competir –con un marcado sesgo bélico– con el de Frei, que otro sector hizo salir potente de sus gargantas.

–¡La esperanza de Chile no tiene el nombre de una persona! ¡Tiene el nombre del pueblo de Chile!–, lanzó Eduardo Frei Montalva.

“Representamos hoy la comunidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría de chilenos y chilenas... El plebiscito no es ni siquiera un intento de transición, sino una prolongación y consolidación del actual poder personal”, dijo. Y propuso alternativa: que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar que establezca en dos o tres años recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático.

El fin de su discurso fue desafiante: emplazó a Pinochet a un debate directo. Pero antes dejó en claro: “Estoy dispuesto a apoyar, sin condiciones y sin ninguna pretensión personal, la forma de transición que he señalado o cualquier otra que reúna los requisitos indispensables para la causa de la democracia, que es la causa de Chile”.

El frío de la noche y los apertrechados policías que asaltaron a los manifestantes a su salida del Caupolicán no pudieron mermar el cambio cualitativo que gestó en ellos el rostro del combate cívico. Frei no sospechaba que, a partir de esa noche, sería el centro de la mira de la Brigada Política del DINE.

Bajo vigilancia.

Los periodistas sabían que él estaba sometido a estrecha vigilancia. En conversaciones *off the record*, Frei recurría –con personas de su confianza– a una artimaña en su oficina del edificio Carlos V, en calle Huérfanos. Se hablaba en el baño, usando como cortina sonora el agua del lavamanos y la música tocada por una radio a pilas. Así –creía él– burlaba micrófonos y antenas dirigidas hacia su oficina. Una escena que parecía surrealista la primera vez y luego, repetida, formaba parte del realismo trágico que se vivía. Se actuaba sabiendo que desde las ventanas de enfrente se fotografiaban sus reuniones. Y que lo dicho en la oficina quedaba también registrado en cintas que iban a ser analizadas por expertos de Inteligencia.

Hoy la justicia tiene en su poder documentos que comprueban esa vigilancia, que incluía los datos transmitidos por informantes. En el informe secreto del “**comandante Ñ-3**” al **Comandante de Unidades**, con timbre de la CNI, por ejemplo, se lee en el punto “b” el detalle de las personas que ese día visitaron a Frei: nombres y patentes de vehículos (**ver facsímil**).

Frei aún no.

No se atrevieron con Frei entonces. Pero al presidente del PDC, Andrés Zaldívar, lo enviaron al exilio. Y así, llegó 1981, un año que marca el ingreso a zona de alerta roja, porque la aguda crisis económica potenciaría el movimiento disidente.

En julio del '81, la Coordinadora Nacional Sindical, liderada por el DC Manuel Bustos, emitió un “Pliego Nacional”. El ministro del Interior, Sergio Fernández, anunció querrela por tratarse de una organización ilegal. Los dirigentes fueron detenidos y presentados con grilletes en el Palacio de los Tribunales.

Al día siguiente, 10 de julio, Frei acudió a una secreta reunión en la Vicaría de la Pastoral Obrera. Allí estaba también Tucapel Jiménez (asesinado un mes después de muerto Frei). Motivo de la convocatoria: formar un “comité de defensa” de los sindicalistas arrestados. Se acordó emitir una declaración de protesta. Frei no firmó, pero fue la primera vez que participó junto a socialistas y comunistas en una iniciativa política concreta.

Cada palabra de lo que allí se dijo fue grabada por un agente de la DINE presente en la reunión. Se decidió dar un paso más en la ofensiva contra Frei.

“Colaborador comunista”.

El 11 de agosto, con violencia, fueron arrestados cuatro de los firmantes del comité y desterrados sin más trámite: los ex ministros Jaime Castillo Velasco (DC), Carlos Briones (PS) y Orlando Cantuarias (PR), además del ex senador Alberto Jerez (entonces Izquierda Cristiana).

Pinochet, furioso, dijo que todos los miembros de la Coordinadora Nacional Sindical “son comunistas con todas sus letras”. Y agregó que quienes solidarizaran con su causa “pasan a la categoría de colaboradores”.

Ya catalogado como “colaborador” marxista, Frei decidió convocar a una conferencia de prensa en su oficina, donde volvió a solidarizar con los sindicalistas arrestados y afirmó que la acción de la dictadura “es parte de una verdadera escalada que tiende a crear un clima de temor y amenaza”.

El ministro del Interior lanzó la amenaza: quienes han solidarizado con la Coordinadora Nacional Sindical “están siendo cómplices o coautores con el marxismo en esta materia, y tendrán que sufrir las consecuencias que significa no cumplir una ley”.

El general Pinochet apuntó directamente a Frei, también en agosto del '81, sin decir su nombre: “Cuando denunciemos complicidad, no estamos calificando meras intenciones, sino hechos concretos. Estos demuestran que el haber sido un opositor a la doctrina marxista no exime de la responsabilidad que se asume cuando se pacta con los exponentes de esa doctrina”.

Pinochet dio otro paso más. Afirmó que castigaría con la mayor dureza a quienes “colaboran con el marxismo, incluso cuando esta colaboración se disfraza con la piel de cordero”. E insistió hacia el final de su discurso en Chillán: “Lo más lamentable es el hecho de que esa lacra del terrorismo cuenta con la complicidad de algunos chilenos que, voluntaria o involuntariamente, se han aliado a ella”.

El paquete letal.

Lo que entonces no se supo es que, **en esos mismos días**, un coronel del Instituto Bacteriológico recibió un llamado telefónico que lo hizo interrumpir su rutina diaria. Le pedían que retirara de Cancillería “**toxinas botulínicas**”. Así lo hizo. En ese entonces, Cancillería funcionaba en el palacio de La Moneda. Grande fue su sorpresa cuando, al regresar, constató que el tubo contenía “**clostridium botulinum**”, una bacteria altamente peligrosa. Su alerta provocó múltiples reuniones y un gran enojo del director del Bacteriológico, el coronel Joaquín Larraín, quien finalmente se quedó con el tubo letal.

Cuatro meses después, el 7 de diciembre del '81, se supo la noticia: siete presos de la Cárcel Pública estaban moribundos como resultado de una extraña intoxicación. ¿Qué había ocurrido? Cinco de ellos eran presos políticos, habían recibido la comida enviada por sus familias, como todos los días, y compartido el alimento con dos reos comunes. Ese mismo alimento fue ingerido por familiares ese día y nada anormal les había ocurrido. El resultado fue que los dos reos comunes murieron y los presos políticos agonizaron por semanas, para finalmente salvarse. Los médicos emitieron un diagnóstico que los exámenes confirmaron: **botulismo**. Pero en el protocolo de autopsia del primer reo muerto, Víctor Corvalán, aparece como causa de muerte: “**intoxicación aguda inespecífica**”.

Nadie entendía cómo pudo ocurrir si el botulismo estaba erradicado en Chile desde hacía décadas. Nadie... salvo los funcionarios del Instituto Bacteriológico que –al conocer la noticia– la relacionaron con el misterioso tubo de Clostridium Botulinum.

Hoy, las presunciones indican que los cinco presos políticos fueron usados como conejillos de Indias de un experimento que puso en marcha la DINE desde el Complejo Químico e Industrial del Ejército, en Talagante. Allí operaba, en el máximo secreto, el agente Eugenio Berríos para una tarea mayor que el simple envenenamiento de disidentes (ver recuadro).

El expediente sobre la intoxicación de los reos en la Cárcel Pública se quemó en un “accidental” incendio. La prensa nunca más mencionó el caso.

Llamado de alerta.

La incipiente articulación política disidente ya tenía hacia fines del '81 un liderazgo claro. Un solo problema interfería en que Frei Montalva tuviera una agenda más activa: el persistente reflujo provocado por una hernia al hiato. A fines de noviembre del '81 decidió operarse, casi un breve trámite. Escogió la Clínica Santa María y a su propio equipo médico. Súbitamente, tras la operación, comenzaron las misteriosas complicaciones.

“Frei está siendo envenenado”, dijo la voz anónima en el teléfono a Hernán Elgueta en diciembre de 1981. Y cortó. El amigo del ex Presidente –amigo de su círculo privado, compartían partidos de golf en Papudo los fines de semana– voló a la Clínica Santa María para alertar a los hijos.

–Recuerdo perfectamente que, aterrados ante esa posibilidad, fuimos con mi cuñado Eduardo a ver de inmediato al doctor Alejandro Goic a su casa. El nos calmó. No parecía posible algo así. Pero redoblamos la vigilancia junto a su pieza–, recuerda Eugenio Ortega, yerno del ex Presidente.

Quien nunca se mostró tranquilo frente a la “seguridad” del paciente fue el doctor Patricio Silva Goñi. Frei le tenía mucha estima desde que fue su subsecretario de Salud, la que no mermó por el hecho de transformarse en médico del Hospital Militar. Formó parte del equipo médico privado de Frei, junto con su conculgado, el doctor Patricio Rojas.

–El doctor Silva revolvía y revisaba varias veces al día los papeleros de la pieza, como si buscara algo raro–, recuerda Ortega.

Quizás el doctor Silva reconoció entre los médicos que entraban y salían –tanto de la habitación como de la UTI después– a facultativos que trabajaban para organismos de seguridad castrense. Ya la policía ha identificado al menos a cinco de esos médicos, entre ellos al doctor Rodrigo Vélez.

Mientras el Presidente Frei estuvo hospitalizado en la Clínica Santa María, desde fines de noviembre del '81 hasta su muerte el 22 de enero del '82, las misteriosas infecciones que se sucedían una tras otra tuvieron a muchos médicos de cabeza. No se explicaban qué sucedía. El cirujano que lo operó, Augusto Larraín, aseguró luego que “nunca, en todos mis años de ejercicio, había visto una complicación así”.

La senadora Carmen Frei recuerda que, hacia mediados de diciembre, su padre experimentó fuertes escalofríos: “Creo que fue entonces cuando sucedió”, dice cabizbaja. Los exámenes anunciaron la aparición de un germen llamado “Proteus”. No había en Chile antibióticos para combatirlo y hubo que traerlos de urgencia desde Estados Unidos.

Cualquiera entiende que, a partir de la muerte del ex Presidente, su familia se sumió en un duelo difícil. Algunos de los hijos miraron más tarde el certificado de defunción que decía: “**Metabólica sepsia agram negativa y sckock séptico por peritonitis aguda**”. Y todos recuerdan que los recorrió un escalofrío cuando los doctores Goic y Rojas les dijeron, con la máxima delicadeza, que

se estaba realizando una autopsia por lo que habría que esperar unas horas para sacar el cuerpo rumbo a la Catedral de Santiago.

Por muchos años nadie quiso recordar siquiera el tema de la autopsia. Y menos pedir los documentos que debían certificar, con lujo de detalles, la bisección del cuerpo y el retiro de vísceras para posterior análisis. Ahora descubren que no hubo autopsia, sino una mera “exploración anatomopatológica”. Se tomaron muestras de tejidos –se ha dicho– por parte de médicos del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Pero el patólogo Martín Etchart habría negado toda intervención de la UC.

“Una gota de estafilococo”.

El hecho es que, por años, las dudas sobre lo acontecido se guardaron con resignación. Hasta que la senadora Frei leyó la frase clave escrita por la agente Mariana Callejas –esposa de Townley– en su libro *Siembra Vientos*. En la página 61, describió al bioquímico Eugenio Berríos y sus declaraciones sorprendentes: **“Así, recuerdo que dijo en cierta oportunidad que no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota, una gota de estafilococo dorado”.**

–Leí ese párrafo decenas de veces. Fue un momento clave, en que mis dudas de tantos años se unieron a la intuición–, dijo la senadora Frei a **Siete+7**.

Fue entonces cuando Berríos –ya asesinado en Uruguay– pasó a estar en el epicentro de la investigación que, con grandes dificultades, inició la familia Frei.

A primera vista resulta inentendible que los Frei –familia “poderosa” – tengan “dificultades”. Pero la senadora Frei sufrió censura en TVN cuando, en 1998, decidió hacer la denuncia sobre la “posibilidad” de que su padre hubiera sido asesinado. Se trataba de un reportaje sobre infecciones intrahospitalarias realizado por la periodista Patricia Espejo en el programa *Informe Especial*. Nunca le dieron una explicación. La tijera corrió por cuenta del director ejecutivo, René Cortázar, aduciendo que era “inconveniente”. Luego vino el arresto de Pinochet en Londres y la tensión máxima con las Fuerzas Armadas. Más “inconveniente” resultaba seguir con la denuncia...

El ahora senador Eduardo Frei explicó, el año pasado en Madrid, que no impulsó la investigación por razones éticas. No quiso que nadie dijera que usaba recursos públicos –policías y jueces– para investigar algo que le atañía en lo personal.

De ahí que la acción de los Frei adquirió nuevo impulso cuando se inició el gobierno de Lagos. Incluyó dos entrevistas con el Presidente de Uruguay y dos con el presidente de la Corte Suprema uruguaya para agilizar los trámites judiciales y conseguir que el cadáver de Berríos volviera a Chile siete años después de su aparición.

El cerco se estrecha.

La senadora Carmen Frei, en octubre de 2000, pidió al Senado que oficiara al Ejército y Carabineros. Ambas instituciones respondieron que nada sabían acerca de Berríos. Y el Ejército no contestó preguntas acerca del Complejo de Talagante, aduciendo “secreto”.

“Dije entonces que el comandante en jefe, general Izurieta, estaba siendo engañado. Y estoy segura que pronto lo podremos demostrar. Dije también que el caso Berríos era la punta de iceberg que puede llevar a desentrañar la muerte de muchas personas. Una de las posibles víctimas es mi padre y mi familia no podrá estar en paz hasta que no hayamos averiguado la verdad”, aseguró la senadora Frei a **Siete+7**.

Por ahora, el cerco se estrecha para identificar a los que ordenaron y ejecutaron la acción de sacar a Berríos del país para evadir la justicia y los que “custodiaron” su presencia en Uruguay, entre los que se cuentan Arturo Rodrigo Silva Valdés, el hombre que aseguraba la logística de los viajes de Pinochet al exterior; Pablo Rodríguez Marquez, Jaime Torres Gacitúa, Mario Cisternas, Raúl Lillo. Una parte de la trama está contenida en la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez. Ahora habrá que rematar en los que ordenaron y ejecutaron el asesinato de Berríos, todos ellos miembros del escuadrón más secreto de la DINE que hasta hoy se ha mantenido en las sombras.

Las bacterias de Hermes

Existe certeza de que Eugenio Berríos fue sacado de Chile en una operación de la DINE porque “sabía mucho”. Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la “Brigada Quetropillán” de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa de Michael Townley en Lo Curro y que activó el proyecto “Andrea”, para producir armas químicas, como los gases Sarín (que ataca el sistema nervioso), Soman y Tabun. En ese laboratorio trabaja con el químico Francisco Oyarzún Sjöberg bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

También se ha constatado que primero probaron, en abril del '76, el Sarín con perros y hasta un burro. Luego lo usaron para matar presos (el poeta **Luis Waldo Silva Caunic**); al español **Carmelo Soria**, en julio del '76; y al abogado **Renato León**, conservador de bienes raíces de Santiago, en noviembre del '76 (por obstaculizar la inscripción de casas a nombre de la DINA, casas expropiadas de facto a personas asesinadas o en el exilio). La autopsia, en este caso, declaró “**toxemia aguda inespecífica**”.

Planearon usar el Sarín con Orlando Letelier, pero optaron por la bomba en septiembre del '76. Luego, en marzo del '77, lo usaron para eliminar al **cabo de Ejército Manuel Leyton**, agente de la DINA, para evitar que se presentara a declarar ante un tribunal. Leyton, arrestado por robo de auto, declaró en Carabineros que robaba autos por orden de la DINA para conseguir repuestos: Tenía en el garage un auto que pertenecía a un detenido desaparecido.

¿Qué siguió después de esos gases? La respuesta la dio Townley en su confesión de marzo del '78: “**productos de extrema toxicidad como Clostridium Botulinica, Saxitoxin y Tetrodotoxina**”.

De su uso también dio una pista Townley. A partir del asesinato de Letelier, en la primavera del '76, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces DINE, general Odlanier Mena. Razón: Mena objetaba los brutales procedimientos de Contreras y el “error” de matar a Letelier en Washington, desafiando al imperio, que puso en jaque al mismo Pinochet.

Contreras, entonces, decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café”, declaró Townley. El café de las cuatro de la tarde que Mena tomaba como ritual. Pero ese día lo dejó servido sobre la mesita y pidió agua de yerbas. ¿Quién proporcionó el veneno? “**Hermes sacó las bacterias del Instituto Bacteriológico de la Universidad de Chile, donde se guardaban**”. Y Hermes, aclaró Townley, era la chapa de **Eugenio Berríos**.

Cuando en abril de 1978, Townley fue expulsado de Chile para mitigar la presión de Estados Unidos por el asesinato de Letelier, el laboratorio de Lo Curro fue desmantelado. Hay constancia de que las armas químicas allí almacenadas fueron trasladadas al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante por el coronel Gerardo Hubert Olivares. El mismo que a principios de los '90 murió en extrañas circunstancias después de haber participado en el tráfico de armas a Croacia. Hubert tenía su historial en la DINA.

Allí lo siguió Berríos. El que siguió actuando para una potencial guerra química bajo otro comando: el grupo más secreto de la DINE y que actuaba en operaciones externas. Allí estaba en diciembre del '81, cuando las huellas indican que alguien dio la orden para eliminar al hombre que yacía en la Clínica Santa María. Hay testimonios que aseguran haber visto al agente, de delantal blanco, en los pasillos de la clínica.